



Vóceros Latino del Valle de San Joaquín
The Latino Voice of the San Joaquin Valley

Bush, la justicia y las políticas raciales

(Published Wednesday, September, 5, 2001 10:25AM)

El Dr. Edward J. Erlar es un Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Estatal de California, San Bernardino y un Miembro Mayoritario del Instituto Claremont. Brian T. Kennedy es Vicepresidente del Instituto Claremont en California. Ambos estuvieron activos en la campaña de la Proposición 209.

Recientemente el Departamento de Justicia de Bush sometió un resumen en la tercera ronda del caso *Adarand* de la Suprema Corte. Explicando porque estaba defendiendo cuotas raciales y preferencias de la Administración Clinton, la vocera del Departamento de Justicia de Bush Mindy Tucker argumentó en el Noticiero Fox que el Departamento de Justicia es el "abogado del gobierno." Aparentemente, no importa que tan notorias sean las políticas raciales del gobierno, Bush y el Departamento de Justicia se sienten obligados a defenderlas. Esto viene a ser una gran sorpresa, sin embargo, como el Presidente Bush, el Abogado General Ashcroft, y el Procurador de Justicia Theodore Olson han sido hasta ahora vigorosos defensores de igualdad ante la ley, y oponentes a preferencias raciales y discriminación.

Entonces cómo se explica la media vuelta? Pudo haber sido una creencia ingenua el que las minorías de repente votaran por los Republicanos si ellos les concedieran preferencias raciales? O están los Republicanos simplemente asustados ante la posibilidad de ser vistos como racistas por la Izquierda?

Cualquiera que sea el caso, si la Administración Bush sale en apoyo a una ley ciega al color ellos tendrán tanto a la opinión pública como a la ley de su parte. Considere el éxito de la Proposición 209 en 1996, la cual terminó con las preferencias raciales en el gobierno educativo y contratos en California. Ganó fácilmente en uno de los estados más liberales, y en la cara de la campaña 'Arréglalo no des por Terminado' de Clinton.

El año anterior a la Proposición 209, la Corte Suprema hizo un reglamento en contra del uso de razas en el gobierno, contratando en el primer caso *Adarand*. En cuestión, entonces y ahora, estaba el hecho de que Adarand Constructors, propiedad de Randy Peck, un hombre blanco, había presentado la cotización más baja en un contrato de contracarril, pero fue pasado por alto a favor de una constructora propiedad de minorías.

La Suprema Corte dictó que este es precisamente el tipo de discriminación racial que se prohíbe con la garantía de la Constitución de “igualdad de protección legal,” ya sea que el intento sea por lastimar o beneficiar a miembros de una raza o clase étnica en particular.

Ya que no hubo “un interés apremiante por parte del gobierno” por los lados raciales—el Congreso alegó que no había discriminación racial en los contratos federales—las cuotas no pueden pasar los estrictos estándares de escrutinio fijados por la Suprema Corte. El caso fue regresado al distrito federal de la corte para disposición.

En respuesta, un Congreso dominado por los Republicanos—también temerosos de manejar el asunto racial—pasaron en 1998 una nueva ley de transporte federal reteniendo cuotas raciales y preferencias a través de la creación de un programa de Empresa de Negocios con Desventajas (DBE), y en esta ocasión alegando evidencia de una discriminación racial ampliamente extendida. Casi toda la evidencia fue anecdótica, y no hubo un intento sistemático para probar la discriminación en la construcción de carreteras federales.

La Corte de Distrito, actuando de acuerdo a la primera decisión de la Suprema Corte en *Adarand*, puede ver el intento del Congreso por disfrazar bajo un delicado velo las preferencias raciales, y ordenar alivio para Adarand. El Juzgado de Apelaciones del Décimo Distrito, sin embargo, cambió la decisión, creyendo que el superar los efectos de discriminación ocurrida en el pasado es de hecho un “interés apremiante.” Lo que trae de nuevo el caso *Adarand* ante la Suprema Corte, pero en esta ocasión con el Departamento de Justicia de Bush en la extraña postura de defender los reglamentos de la Administración Clinton.

En un informe más evocador a Janet Reno que a John Ashcroft los abogados de Bush defendieron la inconstitucional idea de que el Congreso tiene la autoridad, es decir, un interés apremiante por parte del gobierno, para permitir contratos con el gobierno basados en la raza para poder remediar discriminación del pasado. Ellos continúan argumentando que satisfacen los estándares constitucionales ya que los nuevos reglamentos del Departamento de Transporte requieren “declaración juramentada” bajo pena de perjurio de que el solicitante ha sido “sujeto a prejuicio racial o étnico” y ha sido “limitado para competir en su sistema de libre empresa,” por ello esta “en desventaja social y económica.” Esta declaración supuestamente hace los reglamentos “estrechamente diseñados” para satisfacer los estándares de estricto escrutinio fijados por el Juzgado.

Pero ya que el concepto de discriminación es muy vago, literalmente cualquiera puede alegar discriminación. No es más que una fachada para la misma vieja cuota y políticas de preferencia racial del pasado.

Al defender las políticas raciales del Departamento de Transporte la Administración Bush está buscando un lugar intermedio en la cuestión de acción afirmativa. No existe un lugar intermedio. La idea de lesiones a las clases nos lleva a remedios para las clases raciales que son necesariamente arbitrarios: Aquellos que no han discriminado son castigados, y aquellos a quienes no se ha discriminado se benefician. La única manera de evitar esto es pidiendo la muestra de lesión individual en un juzgado de ley, y ofrecer alivio de acuerdo a cada instancia en particular. Esto de hecho es lo que requiere la Ley de Derechos Civiles de 1964.

A pesar de las aseveraciones de la Sra. Tucker, el Departamento de Justicia de Bush no estaba obligado a considerar la postura de la administración Clinton. Ellos simplemente deberían haber reconocido que las preferencias raciales son moralmente incorrectas e inconstitucionales de acuerdo de la Suprema Corte, y no encontrarán apoyo en la Administración Bush. En vez de eso fueron intimidados por los políticos raciales, y escogieron la vereda fallida de tratar de arreglar la acción afirmativa en vez de terminarla.